



PROSEGUR RESEARCH

¿Por qué América Latina es la región más violenta del mundo?

Sonia Alda Mejías

Coordinadora Red de Expertos de Prosegur Research

2022

Índice

01 La violencia criminal en América Latina 4

02 ¿Por qué América Latina es la región más violenta del mundo? 9

03 ¿Es anómica la sociedad latinoamericana? 16

04 El fracaso de las políticas públicas de seguridad 18

Introducción

Desde hace tres décadas, América Latina es la región más violenta del mundo, de manera sostenida y además con una tendencia ascendente. Durante el período 1990-2016, la tasa promedio de homicidios de la región se mantuvo entre 14,5 y 16,7 por cada 100 000 habitantes, o alrededor de dos a tres veces el promedio mundial, antes de aumentar a 17,2 en 2017. En otros términos, en el continente americano se concentra el 37% de los homicidios de todo el planeta, con apenas 8% de la población mundial, de acuerdo con Naciones Unidas.

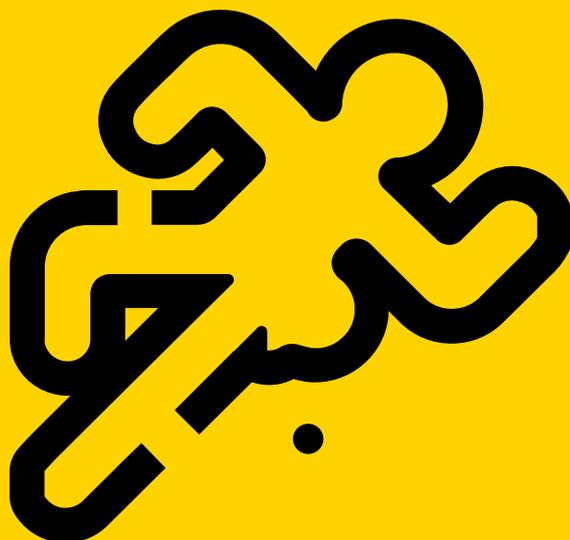
Si recurrimos a simplificaciones y estereotipos sobre la región, la respuesta sobre estos niveles de violencia criminal es inmediata. América Latina es una región pobre y desestructurada y para algunos sin democracia. En otras palabras, los prejuicios y supuestos estereotipados, no constatados, sobre la región ayudan a asociar de inmediato los homicidios y la violencia criminal con la pobreza, bajos niveles de educación, de bienestar, en general, y deficiencias de democracias fracasadas. Esta realidad simplificada explicaría, sin mucha dificultad, la violencia en la región.

Sin embargo, si nos desprendemos de supuestos y estereotipos y observamos la realidad, esta visión explica poco o nada. Por varios motivos, el primero es que América Latina no es una región en el fondo del subdesarrollo y porque los factores económicos no explican toda la realidad.

El objetivo de este análisis es preguntarse por qué hay estos niveles de violencia y la respuesta no es fácil.

De hecho, está sin resolver. Aunque hay respuestas casi mecánicas mediante las cuales se da por resuelto el problema: pobreza y democracias débiles o fracasadas. La propuesta es desmontar estos supuestos y pensar, qué factores actúan de manera determinante. No es suficiente plantear una visión multicausal, es necesaria más precisión y para ello conviene establecer una jerarquía de factores de mayor a menor importancia. En esta jerarquía tendrá un lugar principal la correlación existente entre imperio de la ley, corrupción e impunidad. Factores a los que no se les otorga la trascendencia necesaria en el ámbito de la seguridad.

Se precisan diagnósticos muy precisos, para que las políticas de seguridad sean eficaces. Ciertamente esta jerarquía no ha de ser fija y rígida. Las circunstancias concretas de cada realidad, nacional o local, pueden modificarla. No obstante, no pueden dejar de considerarse el nivel de consolidación del buen gobierno, basado en la aplicación, sin excepciones de la norma y en la transparencia. El buen gobierno es el antídoto más eficaz contra la corrupción y la impunidad, determinantes para entender los niveles de criminalidad alcanzados en la región y el desarrollo y poder alcanzado por el crimen organizado.

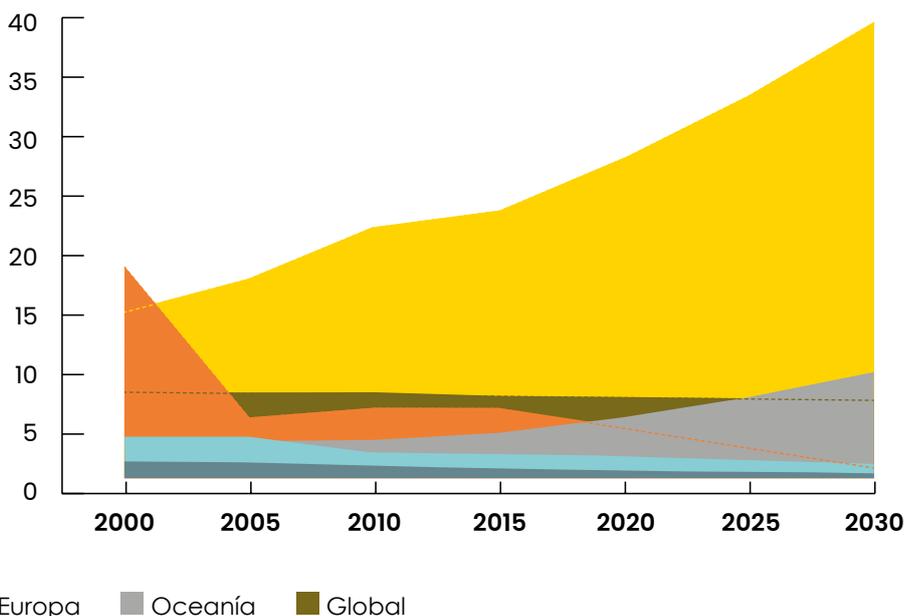


1. La violencia criminal en América Latina

Antes de profundizar en las causas de la violencia criminal, conviene caracterizar cuantitativa y cualitativamente el problema, para poder contemplar sus dimensiones y complejidad. Para ello, conviene insistir en la posición latinoamericana respecto al resto

del mundo en el número de homicidios. En el siguiente gráfico se pone de manifiesto no sólo que es la región con más homicidios, sino en qué medida lo es. La diferencia con las otras regiones es muy marcada.

Tasa media de homicidios proyectada a nivel regional de 2000 a 2030



Fuente: Elaboración a partir de Muggah y Aguirre (2018).

El Instituto Igarapé proporciona datos muy significativos. La región tiene una tasa de 21,5 homicidios, por cada 100 000 habitantes, más de tres veces el promedio global (7 asesinatos por cada 100 000 habitantes). En los últimos 10 años, la tasa regional de homicidios de América Latina ha aumentado 3,7% al año, tres veces la tasa de crecimiento de la población de 1,1%.

Todos estos datos dan lugar a que 17 de los 20 países más violentos del mundo están en América Latina. Las perspectivas de futuro no son alentadoras, muy al contrario. Tomando los datos de la UNODC, de 2015, el Instituto Igarapé prevé la continuidad del crecimiento del número de homicidios: en 2030 esta tasa se incrementará hasta los 36,9 asesinatos por cada 100 000 habitantes.

“ No puede suponerse que la violencia es uniforme e igualmente intensa, muy al contrario, hay una gran diversidad. ”

No obstante, no puede suponerse que la violencia es uniforme e igualmente intensa, muy al contrario, hay una gran diversidad. No sólo entre países, sino en cada uno de ellos. En cualquier caso, hay una tendencia ascendente, en términos generales, en la región, del número de homicidios que parece tener continuidad en la próxima década, cuanto menos.

Esta violencia presenta ciertas características. Lo cierto es que, aunque la violencia no sólo se concentra en las ciudades, en 2016 y en 2017, 43 de las 50 ciudades con más homicidios del mundo, estaban localizadas en América Latina.

Más de 141 de las urbes latinoamericanas (52%) registran tasas de homicidios superiores al promedio regional (21,5 por 100 000 habitantes).

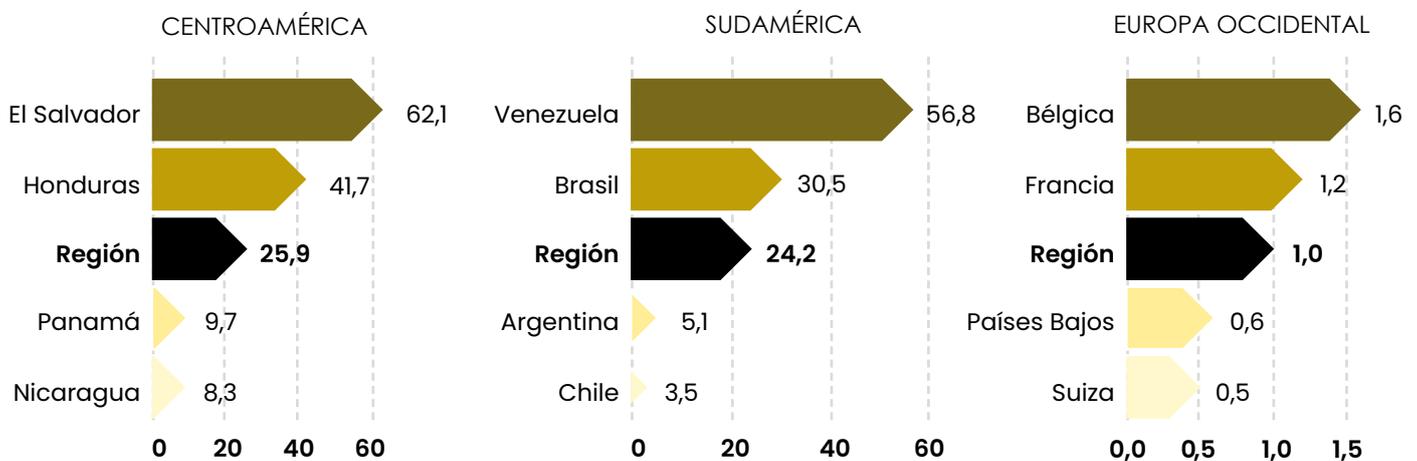
Estos datos desorbitados coinciden con el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo.

Así, Centroamérica es la región más violenta, si bien en los últimos años, la diferencia ente una subregión y otra ha ido disminuyendo. Los motivos son tanto el descenso en Centroamérica, como el ascenso de homicidios en Sudamérica. Considerando las tasas por países, tanto de una subregión, como de otra, es llamativo el extraordinario margen entre los casos más extremos (con más y menos homicidios).

No obstante, pese a ello, al comparar la diferencia de datos con Europa, los niveles de violencia son siempre considerablemente más altos, aun en el caso de los países con menos homicidios.



Países con las tasas de homicidios más altas y más bajas de regiones seleccionadas

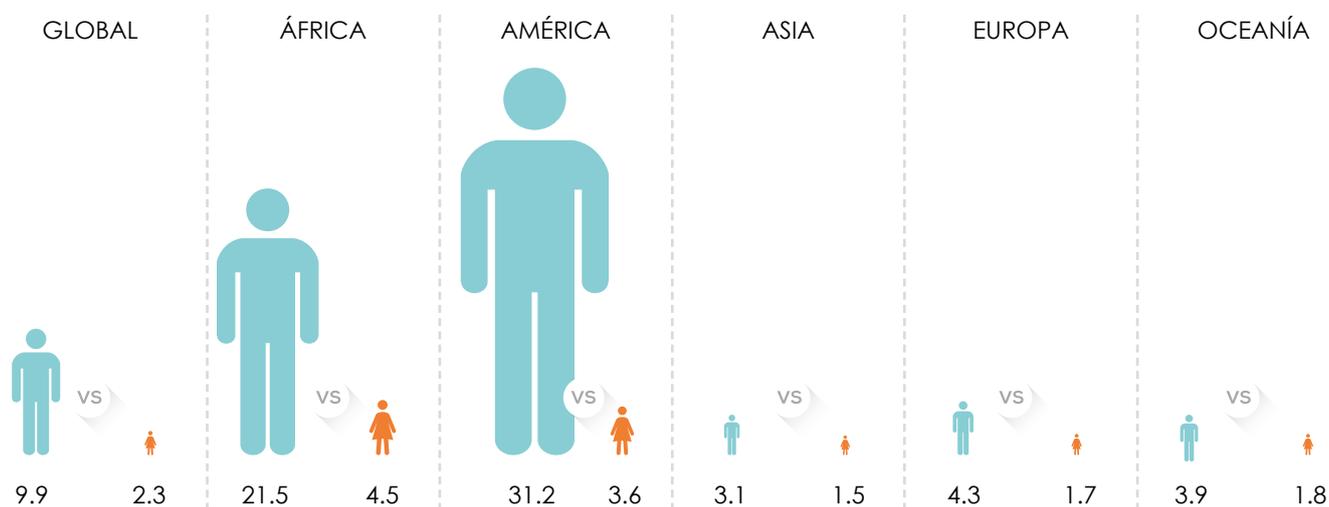


Fuente: Elaboración propia a partir de UNODC (2019).

La media de homicidios en Europa es de 1 homicidio por cada 100 000¹, frente a los 24,2 del promedio latinoamericano. De hecho, los países con menor número de homicidios en América Latina son entre 3 y hasta más de 9 veces mayor que los casos nacionales con mayor número de homicidios en Europa.

Los homicidios también revelan que la violencia criminal afecta, con gran diferencia, a los hombres. Esta característica también se da en el resto del mundo, sin embargo, en el caso latinoamericano la proporción de hombres es mucho mayor, llegando a superar 10 veces al de las mujeres.

Homicidios de hombres por cada 100 000 habitantes

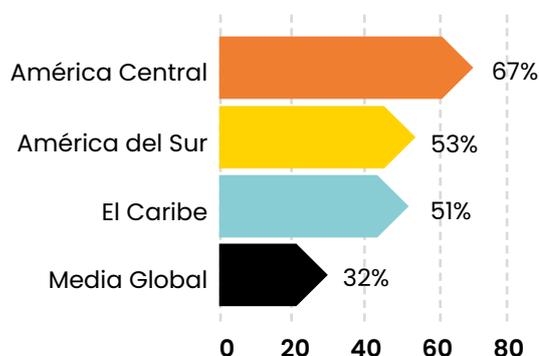


Fuente: Elaboración propia a partir de UNODC (2019).

Además, estas víctimas y victimarios son jóvenes, la franja de edad más afectada se encuentra entre los 15 y los 29 años, constituyendo el 50% de los asesinados.

Asimismo, también puede saberse que las armas de fuego son el instrumento más empleado en la región para cometer los asesinatos, siendo la región donde más se utiliza este tipo de arma para cometer asesinatos.

Proporción de homicidios con arma de fuego



Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Igarapé (2018).

¹En España es de 0,7 homicidios/100 000 homicidios.

Los actores criminales que generan tanta violencia

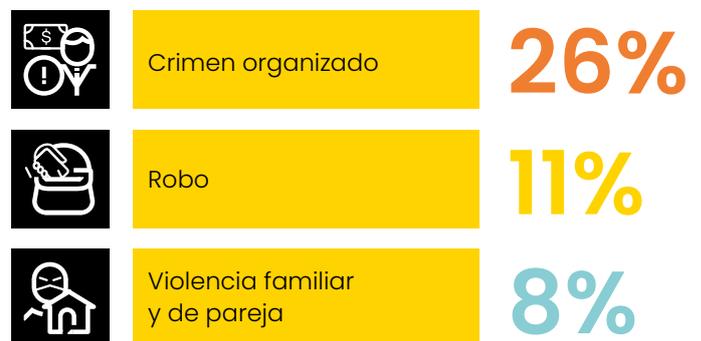
No deja de ser aparentemente paradójico que, siendo la región más violenta del mundo, en el espacio intraestatal, al mismo tiempo es una región ejemplar en las relaciones interestatales. Así lo demuestra su pacífica convivencia vecinal, durante los siglos XX y XXI².

La violencia intraestatal ha ido cambiando con las transformaciones históricas. Durante la Guerra Fría, cuando tuvieron lugar las guerras internas de cada país, el combate al comunismo desde los gobiernos, mayoritariamente militares, también generó altos niveles de violencia, en este caso, política. Con las transiciones democráticas, desde mediados de los ochenta a mediados de los noventa, la violencia deja de ejercerse por el enfrentamiento ideológico y comienza la violencia criminal.

En este nuevo escenario de inseguridad la delincuencia común alcanza muy altas cuotas, pero sin duda, el desarrollo del crimen organizado, motivado por las sustanciosas ganancias de tráfico ilegal, se convierte, a partir de este momento, en la principal amenaza en la región. El poder de estas bandas y redes criminales ha permitido que ejerzan incluso el control territorial de extensas áreas y suplan al Estado en sus funciones impartiendo justicia, seguridad, construyendo infraestructuras y/o proporcionando servicios a la población.

“ No deja de ser aparentemente paradójico que, siendo la región más violenta del mundo, al mismo tiempo es una región ejemplar en las relaciones interestatales. ”

Proporción de homicidios por tipo



Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Igarapé (2018).

²Mientras que Europa sufría dos guerras mundiales, en el siglo XX, en América Latina, se dieron enfrentamientos como los seis días, Guerra del Cenepa.

En el gráfico es posible comprobar la magnitud del crimen organizado, ya que (a excepción de otros) es la principal amenaza. Sin embargo, este dato, aunque orientativo, no puede ser asumido como definitivo. No todos los países utilizan los mismos criterios para clasificar los delitos de estas organizaciones. De hecho, no ha habido, hasta el momento, la posibilidad de acordar un índice para medir y cuantificar el crimen organizado. Este es un fenómeno complejo que no puede ser analizado únicamente mediante datos cuantitativos, como el de homicidios. Por otra parte, la existencia de crimen organizado no necesariamente genera altas cotas de homicidios y además se pueden ejercer otras formas de violencia, sin llegar a los homicidios y estos actos tampoco están cuantificados. La existencia de violencia criminal depende de muchos factores y coyunturas, una de ellas es el grado de convivencia existente entre diferentes organizaciones o la presión estatal, entre otras muchas. En México, en Brasil o en Colombia, ambas cuestiones inciden, con mayor o menor intensidad en los niveles de violencia de estos países.

El caso de Bolivia es muy significativo. Desde hace unos años, este país es considerado plataforma de redistribución de la coca y cocaína producida en el país, así como de la peruana y de la colombiana. Sin embargo, no se encuentra entre los casos nacionales con mayor número de homicidios, sino entre los más bajos. Téngase en cuenta que estos tres países son los mayores productores del mundo de coca.

Sin embargo, mientras que Colombia mantiene altos índices de homicidios, aunque ciertamente no los más altos, Perú y Bolivia se han mantenido entre los países con menos homicidios. Perú lleva mucho tiempo entre las 6 y 8 víctimas cada 100 000. En el caso concreto boliviano, el máximo de homicidios ha sido de 12,7 y 12,1 por cada 100 000 habitantes (2010 y 2011), según UNODC, hasta descender en 2020 a 6,2. Cifras que no dejan de ser dramáticas, pero, considerando las del resto de la región, no se encuentra entre las peores.

No obstante, es preciso insistir en que el crimen organizado es un actor criminal, con extraordinaria influencia social y política, que ha logrado integrarse en la sociedad. Esta presencia en la economía, en la sociedad y en las estructuras del Estado es lo que hace posible su poder y se retroalimenta, como así ocurre, muy particularmente, en determinados países de la región, como México, Centroamérica, Colombia, Brasil o Venezuela.

Las dos grandes potencias de la región, México y Brasil se encuentran afectadas por la implantación de poderosas organizaciones criminales, que, en estos casos, como en los demás países citados, el crimen organizado se manifiesta muy violentamente y arrastra tras de sí muchas víctimas mortales, como se aprecia en sus respectivos índices de homicidios.



2. ¿Por qué América Latina es la región más violenta del mundo?

Una vez analizado el escenario de inseguridad y la dimensión de la violencia regional, la pregunta es particularmente importante para poder buscar soluciones. De ahí que es trascendental crear un buen diagnóstico.

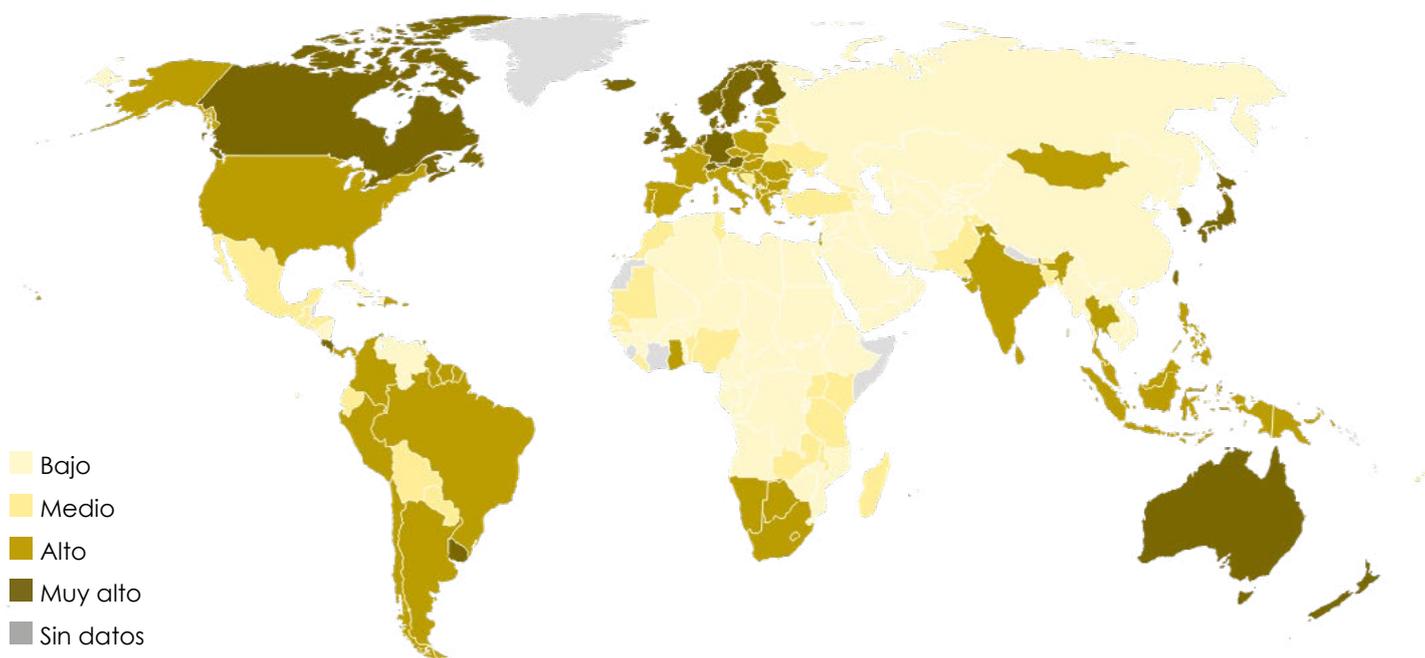
La aproximación a la realidad exige una perspectiva multidimensional para entender la complejidad del problema. De ahí que examinaremos la realidad latinoamericana, desde distintos ámbitos, para detectar factores que expliquen los niveles de violencia alcanzados en la región. Para ello se ha adoptado una perspectiva comparada, con otras regiones del mundo, siguiendo la pauta aplicada

para contemplar las tasas de homicidios, ya que ayuda a dimensionar el problema.

Para ello contemplaremos las bases de datos internacionales que informan sobre nivel de democracia, desarrollo y fortaleza institucional.

Sobre el primer aspecto, la unidad de inteligencia de *The Economist* publica con regularidad un índice de democracia que contempla numerosas variables para evaluar la democracia en los países del mundo³. Con estas elabora un índice y de acuerdo con este realiza una clasificación de cuatro categorías: democracias plenas, democracias sin consolidar, regímenes híbridos y regímenes autoritarios.

Índice de Democracia



Nota: El nivel muy alto corresponde a democracias plenas, el nivel alto a democracias sin consolidar, el nivel medio a regímenes híbridos y el nivel bajo a regímenes autoritarios, tal y como establece el Índice de Democracia.

Fuente: Elaboración propia a partir de *The Economist Intelligence Unit* (2021).

³ Este índice construye con 60 indicadores que se agrupan en cinco diferentes categorías: Proceso electoral y pluralismo, Libertades civiles, Funcionamiento del gobierno, Participación política y Cultura política.

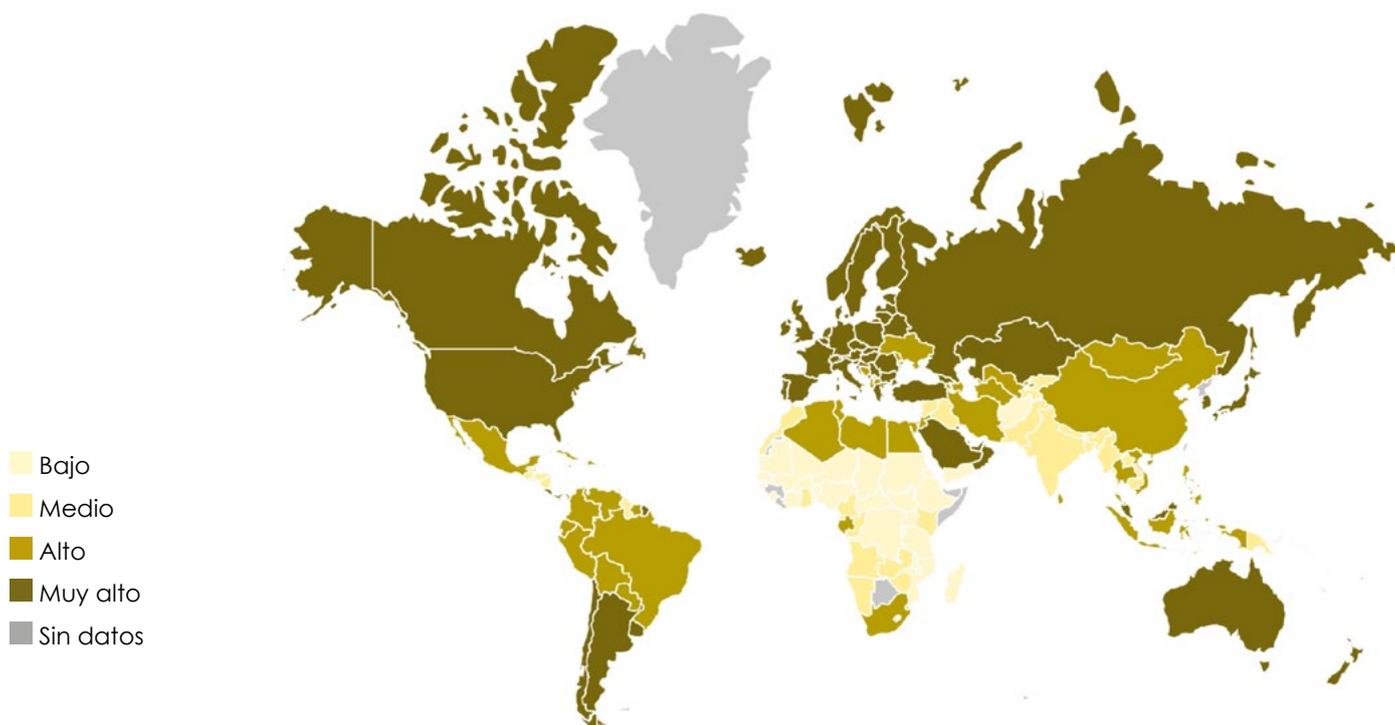
América Latina, de acuerdo con este índice, se encuentra en el segundo rango. Costa Rica y Uruguay se ubican en el primer grupo. *The Economist* equipara a América Latina con las democracias de Europa del Este, si bien considera que el posicionamiento de las democracias latinoamericanas es mejor y sus democracias más sólidas, aunque compartan problemas comunes.

El primer hallazgo encontrado es que, aunque en la región no hay democracias plenamente consolidadas, su posición es intermedia. Podría concluirse que, si bien no se trata de democracias consolidadas, no explican la dimensión de la violencia criminal, ya que no

hay ninguna referencia de gravedad proporcional a la dimensión de la violencia.

En relación con el desarrollo, se ha adoptado el índice de desarrollo humano que como es sabido se formula considerando la educación, la salud y la riqueza o producto interior bruto (PIB)⁴. Este se considera el indicador más completo, al no considerar únicamente un dato cuantitativo, sino también variables cualitativas. De acuerdo con este indicador, la situación de América Latina, respecto al resto del mundo, tampoco se encuentra en una posición de extrema precariedad.

Índice de Desarrollo Humano



Fuente: Elaboración propia a partir de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2021).

⁴ 1 Salud: medida según la esperanza de vida al nacer.

2 Educación: medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de la educación obligatoria.

3 Riqueza: medida por el PIB per cápita PPA en dólares internacionales.

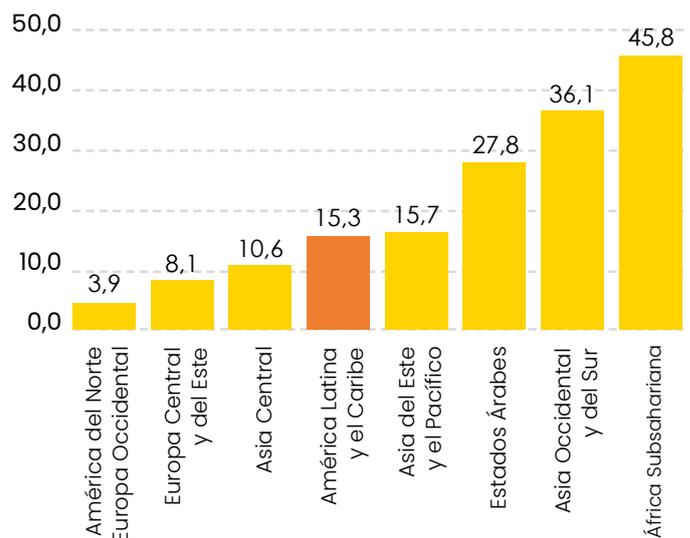
Contemplando los tramos del desarrollo humano la región se encuentra nuevamente en una posición intermedia, en este caso intermedia-alta⁵. Sin embargo, si se aplica el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad (IHDI), la situación cambia, indicando un índice de desarrollo humano más bajo y de una posición media alta, se reubica en una posición media baja, como se ilustra en el mapa del Índice de Desarrollo Humano. El PNUD considera que “el IHDI es el nivel real de desarrollo humano (que representa la desigualdad), mientras que el IDH puede verse como un índice de desarrollo humano ‘potencial’ (o el nivel máximo de IDH) que podría lograrse si no hubiera desigualdad”.

Sin pretender restar importancia al problema estructural de desigualdad que posee la región y que obstaculiza su desarrollo, no parece que sea un factor, o sólo este, que explique la dimensión adquirida por la violencia. De hecho, en otras regiones hay países con niveles de desarrollo similares que no tienen estos niveles de criminalidad. Si suponemos una relación directa y mecánica entre inseguridad y nivel de desarrollo, el caso africano desmonta también esta relación. En la medida que la situación de desarrollo en África

es la peor del mundo, también deberían serlo sus índices de violencia, sin embargo, no parece que este sea el principal reto de la región. Ciertamente no hay suficientes datos estadísticos para realizar afirmaciones en ningún sentido, pero cuanto menos los expertos en la región, no han planteado que la inseguridad sea tan determinante ni grave en el continente como en América Latina.

Dentro de los factores a los que se suele dar particular importancia y que de manera generalizada se asocia a la inseguridad, son los niveles de educación de la población. Para Naciones Unidas es un factor trascendental, a mayores niveles de formación, se darían menos homicidios. América Latina es una región prácticamente alfabetizada. El actual reto es la educación secundaria que favorecería la integración de la población joven en el mercado laboral. Sin embargo, de nuevo los datos no explican de manera mecánica la relación con la inseguridad. Si observamos el siguiente dato podemos comprobar que, pese a que la educación secundaria es un reto, América Latina no es la región con mayores deficiencias en este aspecto.

Tasa de población joven en educación secundaria



Fuente: Elaboración propia a partir de UNESCO (2015).

⁵ Inequality-adjusted Human Development Index, <http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI>

Así pues, admitiendo la importancia de este factor, es preciso relativizar su peso. Hay otras regiones en situaciones peores a la latinoamericana, como la asiática o los países árabes que, a pesar de tener muchos más jóvenes fuera de centros educativos, no tienen los niveles de violencia de la región. Llama particularmente la atención el caso de Asia Occidental y del Sur, donde se duplica el número de jóvenes, con respecto a América Latina, que no cursan la educación secundaria. Por otra parte, cabe tener presente que,

ante la complejidad de los negocios actuales de las redes criminales transnacionales, cada vez es más importante contar con colaboradores altamente cualificados. Los negocios legales e ilegales del crimen organizado exigen de una élite ilustrada, que de hecho se forma en Europa y Estados Unidos en prestigiosos centros de negocios y de alta dirección. No es posible seguir contemplando el mundo criminal, integrado únicamente por sectores socialmente marginales y sin formación.

Discusión sobre perspectivas y enfoques

De acuerdo con los datos examinados, no ha sido posible encontrar datos de naturaleza política, económica y social que pudiera explicar la dimensión de la violencia criminal en la región. América Latina, según las fuentes oficiales de diferentes organismos internacionales, se encuentra en una posición intermedia, con respecto a otras regiones. En otras palabras, no se detecta ningún aspecto de extrema gravedad que pudiera explicar la seriedad de los índices de homicidios que le afecta. Lo que obliga a seguir buscando otros factores que puedan ayudar a entender la dimensión de la violencia y de la actividad criminal. Son muchos los años que lleva alargándose la discusión en torno a las causas que podrían explicar los altos índices de violencia criminal en América Latina, sin encontrar un consenso.

Durante un largo tiempo dominó el determinismo economicista, insistiendo en la desigualdad y la pobreza como las causas de esta violencia. Sin embargo, en el momento de mayor expansión económica y reducción de la pobreza y la desigualdad (2013), la violencia no disminuyó, sino que siguió aumentando. El PNUD pone de manifiesto de manera muy expresiva ambas dinámicas, para la década señalada: “América Latina ha sido el escenario de dos grandes expansiones: la económica y la delictiva”.

Posteriormente se ha ido abriendo un enfoque multidimensional y se han incluido más factores como la debilidad institucional, la corrupción, la impunidad y la falta de políticas integrales y de profesionalidad en los agentes estatales, junto a factores políticos, sociales y económicos. En efecto, en los últimos años se ha comenzado a contemplar la cuestión

institucional, incluso la ausencia de Estado como uno de los factores que contribuyen de manera decisiva en la implantación del crimen organizado. La corrupción es otro tema que ha adquirido importancia para explicar este tipo de criminalidad. Sin embargo, no hay mucha precisión en determinar la importancia de estos factores que además se contemplan por separado y de manera aislada, unos de otros. Incluso todavía hay factores que apenas se están contemplado en el ámbito de la seguridad, como percepciones y concepciones culturales de las sociedades que, sin embargo, inciden directamente en este ámbito.

En primer lugar, es preciso separar las causas de las consecuencias y, en segundo lugar, ordenar y jerarquizar éstas últimas. Con ello será posible entender no sólo por qué hay inseguridad sino muy particularmente por qué alcanza niveles tan altos. Los factores económicos podrían explicar un determinado grado de inseguridad, pero no los actuales, máxime cuando la región ha estado creciendo al mismo tiempo que los niveles de criminalidad. De esta manera, es preciso buscar, además de las económicas, otras causas de distinta naturaleza.



La trascendencia del buen o del mal gobierno para proporcionar seguridad

En las siguientes páginas se argumentará que el buen gobierno y la cultura de la legalidad es un factor trascendental para proporcionar seguridad. De acuerdo con la fortaleza de ambos factores, el Estado tiene más posibilidades de controlar la delincuencia y la expansión del crimen organizado. En sentido contrario, el mal gobierno y la cultura del privilegio explicarían la extraordinaria dimensión de la actividad criminal y el poder de las redes criminales.

El buen gobierno significa un gobierno no corrupto y transparente basado en la imparcialidad y aplicación rigurosa de la norma, sin excepciones, bajo el imperio de la ley. Este alimenta y consolida la cultura de la legalidad que significa que los ciudadanos no aceptan la corrupción y acatan la ley. Por el contrario, el mal gobierno es cuando el Estado no siempre aplica la ley y no exige a determinados ciudadanos su cumplimiento. Esto se debe a que, en determinadas circunstancias, la ley no se aplica de manera objetiva y universal (buen gobierno), sino bajo criterio subjetivos y particulares. En consecuencia, a efectos prácticos, es posible negociar el cumplimiento de la ley o ignorarla para proteger a determinados sectores, que puedan pagar para lograr la excepcionalidad ante la ley. Para que este sistema se reproduzca es preciso determinados niveles de tolerancia hacia la corrupción y la impunidad. En esta realidad y bajo la influencia de la cultura del privilegio, frente a la igualdad ante la ley, la aspiración es el privilegio, como forma de progresar.

Este es el entorno idóneo para la actividad criminal,

el mal gobierno y la cultura del privilegio, donde la debilidad del imperio de la ley y la corrupción aseguran la impunidad. Para las redes y los actores criminales, en general, es particularmente importante capturar, mediante la corrupción, instituciones que les garanticen el mayor grado posible de impunidad para asegurarse la maximización de su ganancia ilícita, sin la penalización o castigo que corresponde a esa actividad ilegal. Por este motivo, la complicidad, a través de la corrupción, de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado, del sistema judicial y del penitenciario es trascendental. “Nadie necesita más protección que un criminal y nadie tiene más posibilidades de otorgarla que un agente estatal” (Dewey, 2011).

En este contexto, los representantes del Estado no siempre aplican la ley de manera objetiva y universal, sino bajo criterios subjetivos y particulares. Con estos criterios tanto actores legales, como ilegales (delincuentes) pueden negociar la ley, mediante la corrupción y lograr impunidad. Con ello se convierten en privilegiados para realizar sus actividades legales y/o ilegales, con particulares ventajas o ignorando la ley. La impunidad es un privilegio que incentiva la actividad criminal y las acciones ilegales.

Para constatar que esta sea la realidad latinoamericana, veamos los índices de imperio de la ley, de corrupción y de impunidad. Vale adelantar que la región se caracteriza por la debilidad del imperio de la ley, alta corrupción e impunidad, en un círculo vicioso, cuya reproducción alimenta el crecimiento sin control de la inseguridad, en tanto los criminales pueden convertirse en privilegiados y como tales, quedan eximidos del cumplimiento de la norma.

“ El mal gobierno y la cultura del privilegio explicarían la extraordinaria dimensión de la actividad criminal y el poder de las redes criminales donde la debilidad del imperio de la ley y la corrupción aseguran la impunidad. ”

El imperio de la ley, la corrupción y la impunidad

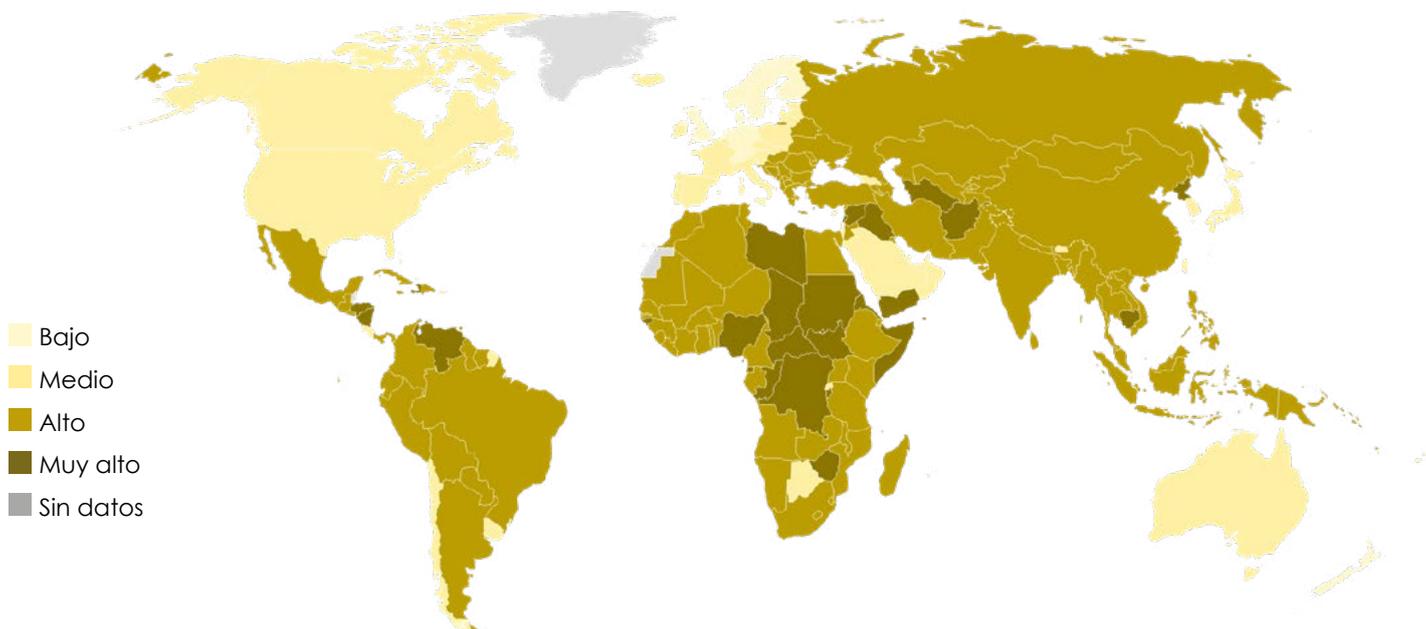
Los valores de los indicadores del imperio de la ley, de control de corrupción y de impunidad se vuelven mucho más negativos que los datos políticos y económicos examinados anteriormente. En estos se abandona la posición intermedia y se pasa a los valores bajos o muy bajos. Así ocurre con el imperio de la ley⁶.

Este concepto se expresa de 0 a 100, donde 100 representa la mejor puntuación de los bajos valores que caracterizan el imperio de la ley. A excepción de Chile,

Uruguay y Costa Rica, con 82, 74 y 70, respectivamente, ningún país llega al 50, a excepción de Panamá con 50,48. Brasil es el que más se aproxima (47,60). La mayoría de los países se encuentra en la franja de 33 a 9. Venezuela es el caso más extremo con 0.48⁷.

Esta debilidad generalizada del imperio de la ley se corresponde con altos niveles de corrupción, como no podía ser de otra manera, ya que el cumplimiento de la ley, en este contexto, puede ser negociado, lo que abre el campo al mejor “postor” para lograr el privilegio de la impunidad, a través de la corrupción. Esto explica el siguiente mapa, donde se pone en evidencia el grave problema de la corrupción en la región.

Índice de percepción de corrupción



Nota: El Índice de percepción de corrupción establece una escala de valores comprendida entre 0 y 100, de tal modo que el nivel muy alto corresponde a aquellas puntuaciones entre 0 y 25, el nivel alto a las puntuaciones entre 26 y 50, el nivel medio a las puntuaciones entre 51 y 75 y, por último, el nivel bajo entre las puntuaciones 76 y 100.

Fuente: Elaboración propia a partir de Transparencia Internacional (2021).

⁶ “Fuente: <https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports>”. No necesariamente ha de haber una contradicción entre la debilidad del imperio de la ley en la región, con las puntuaciones intermedias y altas que figuran en el Índice democrático en *The Economist*, examinado páginas atrás. Los valores de este índice refieren a los fundamentos democráticos referidos al funcionamiento democrática den relación con la normalización en la alternancia en el poder, el cumplimiento de derechos individuales básicos.

Pero no aborda variables directamente relacionadas con la institucionalidad estatal.

⁷ En la franja de 30 se encuentra Colombia (38), Argentina (37), Perú (33). En la de 20 esta Ecuador con 29, México con 27.40 y El Salvador, 23.56. En el penúltimo tramo se encuentran Honduras (15), Guatemala (13.94) y Bolivia, (11.6). Finalmente, Nicaragua tendría una puntuación de 9.62. El caso más extremo es Venezuela, ya citado.

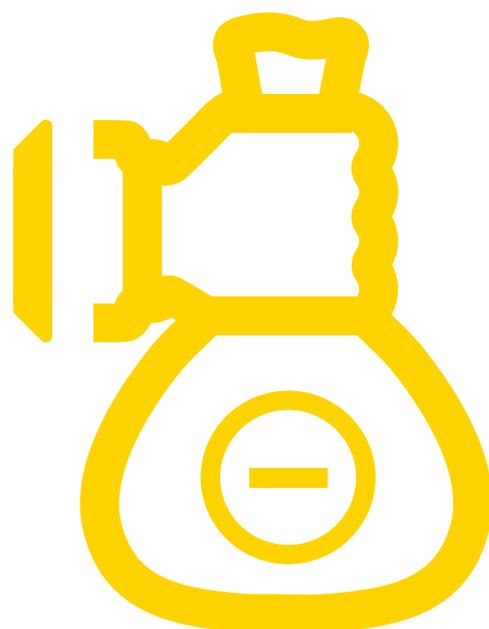
Esta correspondencia explica que haya una correlación casi idéntica entre la fortaleza o debilidad del imperio de la ley y la capacidad de controlar la corrupción. A menor fortaleza del imperio de la ley, más margen de negociación para eximir el cumplimiento de esta y, en consecuencia, menor control de corrupción, y al contrario.

Cabe señalar que los países de ambos extremos presentan, entre sí, una característica más: Chile, Costa Rica y Uruguay, además de tener el imperio de la ley más fuerte y, consecuentemente, mayor capacidad de control de la corrupción, también se encuentran entre los países de la región con menos homicidios. Todo lo contrario ocurre en los países del Triángulo Norte centroamericano (Honduras, Guatemala y El Salvador) y en Venezuela. Estos países además de tener muy bajos valores en relación con el imperio de la ley y el control de corrupción presentan los datos de homicidios más altos de la región y de los más altos del mundo. No obstante, no necesariamente ha de haber una relación mecánica entre bajo imperio de la ley y corrupción, con altos homicidios. Como ya se ha mencionado la actividad ilegal y criminal no siempre se manifiesta violentamente, pero sin duda un escenario con estas características son las idóneas para el crecimiento impune de actividades ilegales.

Los altos niveles de impunidad se corresponden con los altos niveles de corrupción que acabamos de ver. El Índice de impunidad global de 2020 de la UPLAD insiste en los graves y altos niveles de impunidad en la región. Gracias a él, se hacen evidentes los altos niveles de impunidad existentes en América Latina, entre las personas detenidas, las juzgadas y las condenadas.

Esta impunidad es la que convierte a los criminales en privilegiados, ya que podrán evadir una detención, o un juicio o una condena, lograda mediante la complicidad de los representantes del Estado.

Así, si pese estos criminales no hubiese podido evadir su detención y un juicio que les condene, en su calidad de privilegiados podrán seguir participando, desde el centro penitenciario, en sus las actividades ilegales. Tampoco se descarta que un líder o banda, mediante dicha complicidad, tome el control de la cárcel y de sus recursos hasta el punto de establecer las normas de convivencia penitenciarias y dirigir la vida del centro. Para lo cual es imprescindible la complicidad del Estado.



3.

¿Es anómica la sociedad latinoamericana?

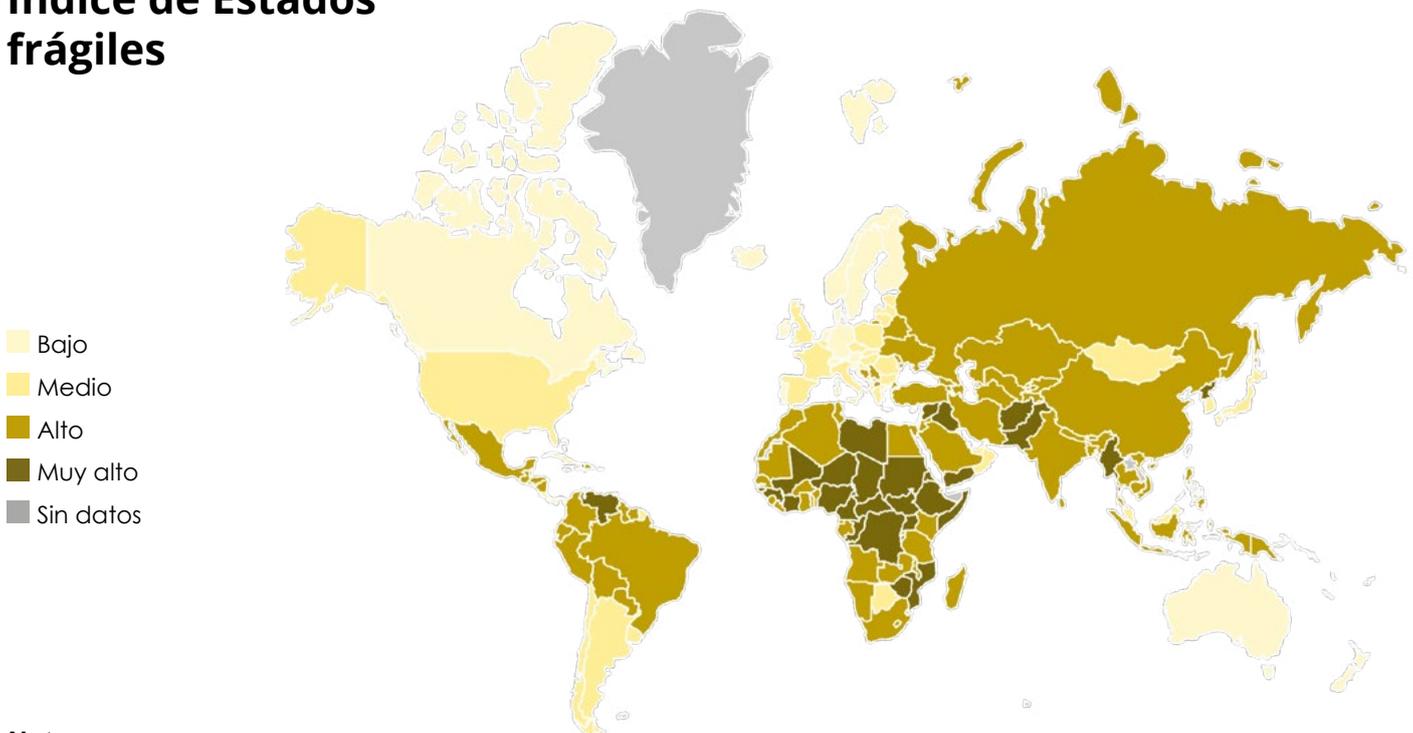
Bajo las claves de la fortaleza del imperio de la ley y, en consecuencia, de los niveles de la corrupción y de la impunidad es posible entender los niveles de violencia y criminalidad que padece la región. Sin embargo, de ello podría suponerse que el problema de la criminalidad podría venir dado de la anomia de estas sociedades. En efecto, la importancia de estas variables radica en la posibilidad, por parte del Estado y de los ciudadanos, de ignorar la ley. Una situación que respondería a la de Estados fallidos.

Se ha convertido en algo común afirmar que una de las principales amenazas para la seguridad internacional son los Estados fallidos. La situación de anomia que caracteriza a estos Estados podría entonces explicar los índices de violencia que padece la región. Supuestamente, estos Estados reúnen las condiciones idóneas para ser refugio y campo de operaciones de terroristas internacionales y de delincuentes vinculados al crimen organizado. Sin embargo, como se aprecia en el índice de Estados frágiles, en América Latina, no hay Estados fallidos, salvo Haití. Llama la atención

el caso venezolano que pese empezar a entrar en el tramo de alerta no llega a la peor situación posible, aún. Atendiendo al siguiente mapa se observa los Estados fallidos se concentran mayoritariamente en África.

“ La situación de anomia que caracteriza a estos Estados podría entonces explicar los índices de violencia que padece la región. ”

Índice de Estados frágiles



Nota: El nivel bajo corresponde a los países sostenibles, el nivel medio a los países estables, el nivel alto a los países en peligro y el nivel muy alto a los países en alerta, tal y como establece el Índice de Estados frágiles.

Fuente: Elaboración propia a partir de *The Fund for Peace* (2021).

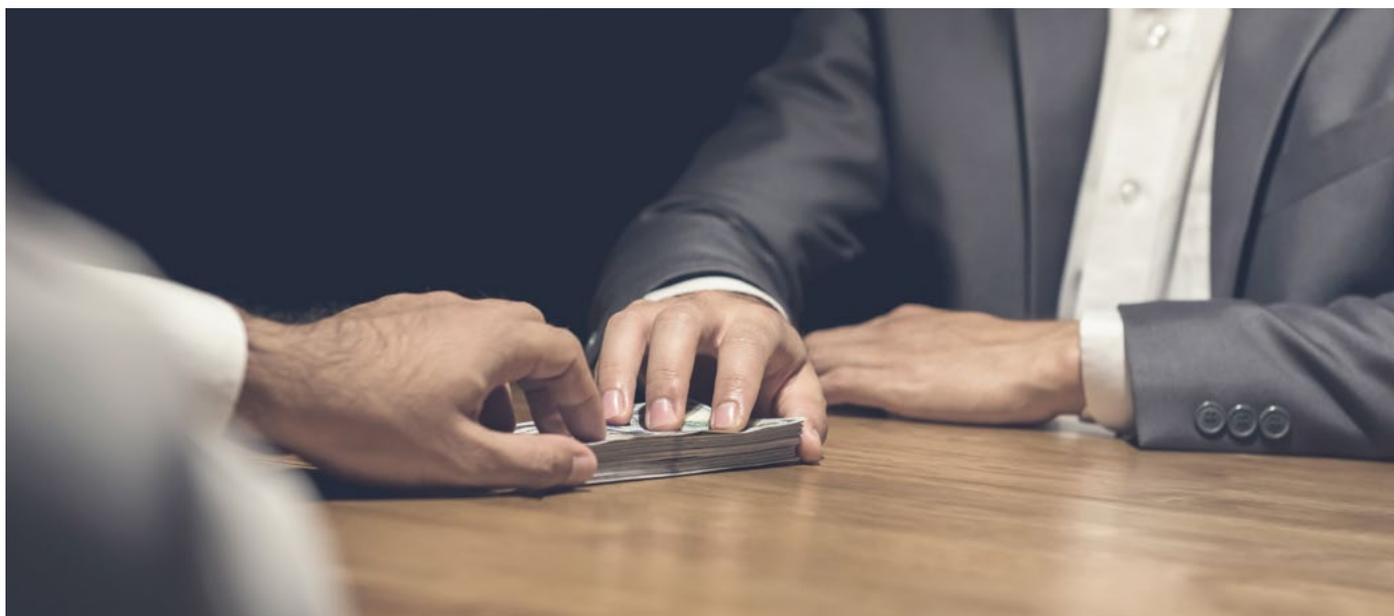
Los Estados latinoamericanos, en efecto, no son fallidos y generalmente se les ha calificado como débiles. La diferencia podría entenderse en términos de grado. Aquel sería la situación más próxima al incumplimiento integral de la legalidad y en consecuencia a la anomia absoluta, mientras que en un Estado débil habría un sistema normativo-legal, donde existe un considerable nivel de cumplimiento de este sistema en la sociedad; si bien siempre cabe la posibilidad de no cumplirlo, de negociarlo o de ignorarlo para proteger a determinados sectores, que puedan pagar para lograr la excepcionalidad ante la ley. En este orden o espacio informal es donde crece la corrupción y la impunidad que hace posible el crecimiento desmedido de la criminalidad.

En efecto, esta debilidad no implica suponer la inexistencia de toda regulación social, como en un Estado fallido, pues en realidad esta debilidad estatal lo que genera es un grado concreto de anomia en el cual convive un conjunto de normas de opuesta naturaleza, formal, que es el orden mayoritario, e informal, que es puntual y funciona en determinadas situaciones y contextos.

Esta dualidad de órdenes proporciona el mejor escenario posible para la criminalidad organizada. Mediante el orden informal existe la posibilidad de negociar la protección y la complicidad estatal mientras, gracias al orden y estabilidad que proporciona el orden

formal, el Estado además es capaz de proporcionar un entorno con un mínimo de orden, estabilidad política, económica y social y/o construir infraestructuras (carreteras, puertos o aeropuertos). El orden y las infraestructuras son inexistentes en los Estados fallidos, pero son trascendentales para el crecimiento de las actividades ilegales. De ahí que los Estados latinoamericanos, proporcionen el campo de cultivo perfecto, no para explicar la existencia de homicidios y actividad criminal, sino para entender su crecimiento.

“ El orden y las infraestructuras son inexistentes en los Estados fallidos, pero son trascendentales para el crecimiento de las actividades ilegales. ”



4.

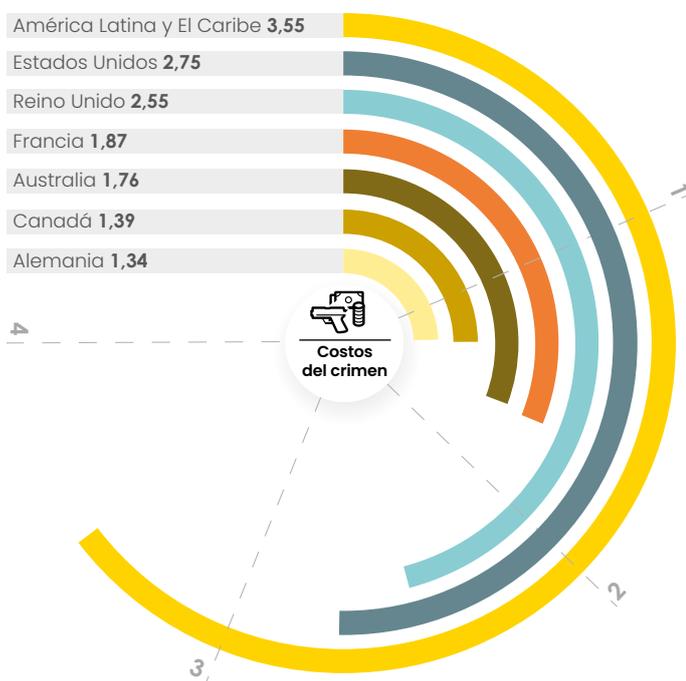
El fracaso de las políticas públicas de seguridad

Al récord latinoamericano de violencia se suma el de gasto en seguridad. Una partida que, tanto en el sector público como el privado, supera a gran distancia al dedicado al mismo sector en Europa y en Estados Unidos. Este dato pone de manifiesto no sólo las limitaciones o fracasos de las políticas formuladas, sino que su fracaso, en buena parte se debe a la falta de un diagnóstico adecuado, de acuerdo con el cual se diseñen las políticas para abordar atinadamente los problemas de seguridad.

El Banco Interamericano de Desarrollo ha realizado

un cálculo sobre los costos generados por el crimen, considerando el gasto gubernamental, el gasto familiar y de negocios y los costos para víctimas y delincuentes. La atención solamente al gasto público, el dedicado a seguridad, en relación con el gasto total, en América Latina y El Caribe, es casi el doble del promedio de los países desarrollados, tal y como se pone de manifiesto en este gráfico. Este dato demuestra que la seguridad es una prioridad para los gobiernos de la región, pero también que la eficiencia de este gasto es cuestionable, pues pese al volumen de gasto no es posible reducir el delito (Jaitman, 2017).

Media de costos del crimen, comparativa internacional



Fuente: Elaboración propia a partir de Jaitman (2017).



Estas evidencias indican que las políticas públicas no están incidiendo en los factores que favorecen la violencia criminal y en particular en el crimen organizado. Desde el mundo académico también se ha insistido en los límites de estas políticas y se encuentra abierto un debate, en torno al diseño de estas, desde hace años.

Desde su primer informe, la Comisión Global de Política de Drogas (2011) viene insistiendo en el fracaso de las políticas de carácter meramente represivo, aunque continúan siendo las principales políticas aplicadas en la región (Comisión Global de Política de Drogas, 2016). Los limitados resultados de estas políticas, sin duda, no compensan el esfuerzo humano y económico que se viene realizando.

Este fracaso además de invalidar las políticas meramente represivas demuestra que los problemas de seguridad no dependen únicamente de recursos, sino de su forma de emplearlos. La eficacia y la eficiencia en seguridad pasa por contar con un diagnóstico preciso que se contemple para diseñar políticas integrales de seguridad.

De acuerdo con el examen realizado sobre la realidad latinoamericana y los factores que pueden incidir en los problemas de seguridad se ha propuesto una visión multidimensional, pero ordenada bajo un esquema jerárquico. Con ello, se pretende otorgar mayor relevancia a unos factores, respecto a otros. En particular, a la necesidad de fortalecer el buen gobierno, para reducir la corrupción y en consecuencia la impunidad. Con ello es posible controlar el desarrollo

de la criminalidad.

A partir de este punto se abren numerosas líneas de investigación relacionadas con la trascendencia de la seguridad, no sólo como campo en sí mismo de análisis, sino por sus implicaciones y relación estructural con el desarrollo y la gobernabilidad.



“ Este fracaso además de invalidar las políticas meramente represivas demuestra que los problemas de seguridad no dependen únicamente de recursos, sino de su forma de emplearlos. ”

**Garantizamos la seguridad de
las personas, las empresas y
la sociedad en su conjunto.**

Para más información contacte con
research@prosegur.com
www.prosegurresearch.com



PROSEGUR